

Las “incursiones” del gobierno en dominios tradicionalmente asociados con la autogestión académica, como el enfoque en el desempeño y los resultados, con frecuencia se presenta como evidencia de la nueva gestión pública neoliberal (NPM, por sus siglas en inglés). Recientemente, las políticas y el pensamiento nacionalistas y nativistas han puesto a la educación superior en conflicto con los gobiernos que han hecho compañía para restringir a los extranjeros, frenar el multiculturalismo y cuestionar los valores sociales liberales. Estas tendencias “ideológicas” le han permitido a la comunidad académica ignorar la crítica genuina, aumentando, como consecuencia, las preocupaciones del público sobre la arrogancia y aislamiento de la educación superior.

Irlanda es nuevamente un ejemplo interesante. El incumplimiento de una universidad para responder los alegatos legítimos de irregularidades financieras, denunciadas por opositores, ha provocado que todo el sistema esté bajo escrutinio público. A su vez, las universidades han argumentado que el menor financiamiento público ha transformado a las instituciones públicas en privadas, alterando el modelo de gobernanza. Sin embargo, al hacer esto, las universidades han efectivamente transformado su rol de “bien público” hacia una relación transaccional —abriendo la caja de Pandora.

En las últimas décadas, hemos presenciado un cambio significativo en los acuerdos de gobernanza, desde regulaciones estrictas hasta una gestión más autónoma, hasta signos de un nuevo contrato social. Este último modelo involucra que las instituciones de educación superior y los gobiernos se unan para formar una visión común con los resultados acordados. Estas prácticas están en marcha en, entre otros lugares, Australia, Hong Kong, Irlanda, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y Ontario. El proceso muestra el potencial de que metas diferentes no necesitan ser mutuamente excluyentes y de que responderle a la sociedad puede darles legitimidad a los propios objetivos de la academia en un sentido más amplio.

Mientras que el Estado históricamente contempló las necesidades de las universidades, hoy —en la era de la globalización y educación superior

casi universal— las instituciones de educación superior contemplan las necesidades de la sociedad. En este nuevo escenario, la educación superior puede elegir participar de forma significativa en la ayuda para construir un nuevo contrato social o el Estado intervendrá —tomando toda la responsabilidad para sí mismo. ■

“Libertad de expresión” y expresión “ofensiva” en el campus

PETER SCOTT

Peter Scott es profesor de estudios en educación superior en el Instituto de Educación de University College London, Reino Unido. Él también es el Comisionado para el Acceso Equitativo para Escocia. Correo electrónico: p.scott@ioe.ac.uk.

Las amenazas a la libertad de expresión y la libertad académica son legión —desde regímenes autoritarios en China, Hungría, Rusia y Turquía y los Estados del Medio Oriente asediados por el fundamentalismo religioso, hasta populistas de la derecha que creen que sus culturas y comunidades están bajo ataque (y que con frecuencia ven a las universidades como bastiones del liberalismo y cosmopolitismo).

Pero los liberales también se han visto involucrados. Estudiantes de la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton han hecho campaña para renombrar los edificios del campus, siendo uno de sus objetivos el presidente Woodrow Wilson, el autor de los “Catorce Puntos”, los principios liberales que terminaron la Primera Guerra Mundial. Luego del éxito de los estudiantes en Ciudad del Cabo, los estudiantes de la Universidad de Oxford han intentado replicar la campaña “Rhodes debe caer”, aunque la ofensora estatua de Oxford del último imperialista victoriano Cecil Rhodes es una versión más modesta que está en el muro de Oriel College.

El último y más importante cambio es que la base de estudiantes de los sistemas de educación superior masivos del siglo veintiuno es mucho más heterogénea que la de los sistemas universitarios de élite que reemplazaron.

RESPUESTAS POLÍTICAS CONFUSAS

Incluso en las democracias, las respuestas políticas han sido confusas. Por ejemplo, en el Reino Unido, el gobierno legisló para exigirle a los líderes universitarios que garanticen la libertad de expresión de voceros no populares (¿de derecha?) y se opongan a campañas “sin plataformas” que buscan excluirlos. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno insistió en que los mismos líderes universitarios prohíban los esfuerzos de los fundamentalistas islámicos de radicalizar a los estudiantes, incluso creando nuevas categorías que no se conocían en el pensamiento democrático, como “extremismo no violento”.

La verdad es que la “libertad de expresión” y la “corrección política” se ven mejor no como principios opuestos, sino que como parte de un espectro. Ninguna persona sensata sostiene que la libertad de expresión es absoluta: primero, porque nadie tiene el derecho a incitar el “fuego” en un cine lleno de gente (¿o usar lenguaje racista en un campus multicultural?); y, segundo, porque la libertad de expresión siempre se ha llevado a cabo dentro de un régimen de leyes. De hecho, algunos de sus defensores más ávidos argumentan que es precisamente el estado de derecho el que garantiza la libertad de expresión.

UN CONTEXTO CAMBIANTE

En lugar de intentar establecer principios absolutos, podría ser más útil identificar algunas tendencias que impactan en este debate. La primera es que hay, y siempre ha sido así, debates legítimos sobre la beneficencia (absoluta) de la ciencia. En el pasado, la objeción no era tanto sobre la ciencia misma, sino que sobre los usos a los que ésta podría dársele. Aho-

ra, algunos van más allá. La investigación con células madres y el genoma humano, con seguridad, y la inteligencia artificial y (algunos aspectos de la) ciencia cognitiva, discutiblemente, plantean interrogantes sobre la autonomía, e incluso santidad, de la existencia humana.

Un segundo cambio ha sido hacia un escenario global más confuso, fracturado, volátil e ideológicamente diverso. Los emocionantes días del triunfalismo post 1989, cuando Francis Fukuyama pronunció el “fin de la historia”, son recuerdos distantes. Las luchas ideológicas han revivido con el surgimiento del tan llamado “populismo” —la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, el aumento del dominio político de Putin, Erdogan y otras. Inevitablemente, estos nuevos malestares se reflejan en el campus y provocan debates más agudos sobre la “libertad de expresión” y la “corrección política”.

Éstos están vinculados a un tercer gran cambio, el surgimiento de la tan llamada política de “identidad”. A los marcadores tradicionales de identidad social como nacionalidad, religión, etnia, género y clase socioeconómica se les han unido nuevos identificadores, algunos (bastante) fijos, como la orientación sexual, y otros son más fluidos, asociados con las preferencias de estilo de vida y los hábitos culturales. El campus con frecuencia es una arena donde estos nuevos marcadores sociales, más fluidos e incluso experimentales, son los más notorios. Aquellos que tienen preferencias fuera de la norma en términos sociales, culturales e incluso sexuales ya no se conforman con resistirse a la discriminación.

El último y más importante cambio es que la base de estudiantes de los sistemas de educación superior masivos del siglo veintiuno es mucho más heterogénea que la de los sistemas universitarios de élite que reemplazaron. Con todos sus defectos, los sistemas de educación superior, en la mayoría de los países avanzados, se han transformado en sistemas “arcoíris” que reflejan la diversidad de las sociedades en las que están inmersos.

Esta diversidad ha tenido implicancias importantes para el debate sobre “libertad de expresión” y

“corrección política”. Por primera vez, los desfavorecidos, que pueden ganar más a partir de una recalibración del lenguaje que se permite en estos debates, están ahora presentes en el campus —y con frecuencia en grandes cantidades. Los valores liberales clásicos, una vez aceptados como universales y absolutos, tienen más probabilidades de ser considerados como parciales y partidistas. El ejercicio de libertad de expresión que parece amenazar su identidad o cultura e incluso su aún precario apoyo en la educación superior puede ser fácilmente interpretado como intolerable.

LAS RESPONSABILIDADES DE LAS UNIVERSIDADES

Se pueden extraer dos conclusiones del impacto de estos cambios en el tono del debate sobre “libertad de expresión” y “corrección política”. La primera es que no hay absolutos. Ninguna sociedad ha alguna vez dado a sus ciudadanos libertad de expresión sin limitaciones. Ningún campus —aunque la universidad debiese ofrecer un espacio donde esta libertad se ejercite hasta estos (e incluso un poco más) límites legalmente impuestos y socialmente exigidos— puede estar de acuerdo en que “todo vale”. Por otro lado, si bien las sensibilidades y vulnerabilidades debiesen respetarse, hay claramente límites para la extensión hasta la que éstas se pueden consentir, si es que las preguntas intelectuales libres y vigorosas están en peligro de ser seriamente inhibidas. Debemos ser pragmáticos e intentar encontrar el equilibrio correcto, el que será diferente en cada lugar y en diferentes momentos.

La segunda conclusión es que las universidades son, o debiesen ser, lugares excepcionalmente buenos para encontrar estos equilibrios en movimiento. La libre expresión, en la forma de indagación crítica, es un valor clave en la academia. Una educación universitaria diseñada no sólo para producir expertos técnicos, sino también ciudadanos críticos, una ciencia progresiva y una escolaridad iluminada dependen de esto. No obstante, la moderación en el lenguaje y el respeto mutuo dentro de la comunidad académica también son componentes claves de la experiencia universitaria—aunque no debiesen invocarse con tanta frecuencia para proteger a los susceptibles o accidentalmente incentivar a aquellos inclinados a la censura. ■

Sistemas postsecundarios, masificación y la universidad de investigación

PHILIP G. ALTBACH

Philip G. Altbach es profesor investigador y director fundador del Centro para la Educación Superior Internacional en Boston College, Estados Unidos. Correo electrónico: altbach@bc.edu.

La expansión de la cantidad de estudiantes y la mayor diversidad de funciones de la educación postsecundaria a nivel mundial en los últimos setenta años no ha tenido precedentes, representando una verdadera revolución en la educación postsecundaria. Sólo en la última década más o menos, las matrículas globales se han doblado. Sin embargo, en pocos países ha existido algún esfuerzo integral para crear sistemas académicos bien definidos y diferenciados para atender las nuevas funciones académicas, para asegurar que la calidad se mantenga o para que el amplio rango de necesidades de una población estudiantil cada vez más diversa se satisfagan.

En la medida que las economías se han vuelto más sofisticadas y globalmente entrelazadas, se necesitan niveles de habilidades cada vez más altos para sostenerlas y la educación postsecundaria ha sido invocada para preparar a una fuerza laboral cualificada. Un título postsecundario se ha transformado en un prerrequisito para la movilidad social y para entrar al mercado laboral especializado casi en todas partes. La creciente diversidad de las instituciones postsecundarias ha respondido a la demanda popular por acceso, pero si bien el escenario se ha diversificado, éste no se ha diferenciado coherentemente.

La universidad de investigación, como el ápice de la institución académica, es clave para la economía global del conocimiento.
